

**JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DOS DE SANTANDER.**

JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO NÚMERO 1156/2013/2.
NIG núm. 3907542120130013058. Sección M.
Dña. /compañía de seguros , Sucursal en España.

SENTENCIA

En la ciudad de Santander, jueves, a 6 noviembre de 2014.

Vistos por mí JAIME-FRANCISCO ANTA GONZÁLEZ, juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander, los presentes autos de juicio declarativo **ORDINARIO** que, registrado con el número **1156/2013**, se sigue en este Juzgado a instancia de **Dña.** , representada por la



procuradora Dña. Eva M^a Plaza López y defendida por el letrado del ICAC D. Francisco de Borja Carrera Poncela, contra , **Sucursal en España**, representada por el procurador D. Diego F. Diego Lavid y defendida por el letrado D. Víctor Tartiere Goyenechea, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD fundada en acción de responsabilidad extracontractual derivada de ACCIDENTE DE TRÁFICO, en consideración a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por la procuradora Dña. Eva Plaza López, en la representación, que tiene debidamente acreditada, de Dña. , se presenta, en fecha 7/11/2013 demanda de juicio declarativo ordinario ante la oficina de reparto del Juzgado Decano de esta ciudad, cuyo conocimiento corresponde por turno a este Juzgado, que la recibe el 14/11/2013, de acuerdo con las normas de reparto vigentes en la plaza, en su día aprobadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y en la que, tras los hechos y fundamentos que en ella constan y que por brevedad se dan por íntegramente reproducidos en este antecedente, termina suplicando que se dicte Sentencia (sic) por la que, estimando íntegramente la demanda, se condene a la demandada a satisfacer al actor, (sic) la suma de 14.232,88 €euros (sic) más los intereses legales devengados, y los que se hayan devengado, (sic) con la (sic) expresa condena en costas a la parte demandada.

SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda por decreto de 21/11/2013, dictado en el seno de los autos de juicio declarativo ordinario núm. 1156/2013, una vez que se subsanan sus defectos procesales en los términos requeridos en el proveído inicial, se acuerda conferir traslado de ella a la demandada, haciéndole entrega de copias tanto de la demanda como de los demás documentos que se adjuntan, emplazándola para que se persone y, en su caso, conteste la demanda dentro del plazo legalmente establecido, de veinte días hábiles desde ser emplazados.

TERCERO. Tras emplazar a la compañía a su instancia se persona el procurador Sr. Diego Lavid presentando contestación en los términos del escrito con entrada en el Decanato del día 22/1/2014 que, tras los hechos y fundamentos que allí constan, interesa que se dicte en su día sentencia por la que desestime la demanda adversa (sic) con expresa imposición de costas a la parte actora.



CUARTO. Se convoca a las partes a la audiencia previa regulada en los artículos 414 y concordantes de la LEC, que se celebra el día 5/6/2014 con el resultado que consta en el acta que levanta la Sra. Secretaria Judicial, unida a los autos, documentándose en soporte videográfico, conforme los artículos 147 y 187 de la LEC.

En la audiencia se escuchan los alegatos de las dos defensas contendientes, quedando claro que no es posible ningún acuerdo, advirtiéndose que ni se alegan ni se aprecian obstáculos procesales que impidan la válida prosecución y término del proceso. No habiendo alegaciones complementarias o aclaratorias ni impugnándose documentos por inauténticos o por padecer algún óbice procesal se precisan los hechos controvertidos (centrados en la dinámica del siniestro y el alcance de los daños) y, acto seguido, se recibe el juicio a prueba, proponiendo la parte actora documental aportada con su demanda, testifical de Dña. y pericial técnica de parte de D. y Dña. en los términos de la minuta escrita aportada como anexo al acta, pidiendo interrogatorio de la demandante, testifical de D. y pericial de parte de D., pruebas todas que se admiten, señalando para celebrar juicio para el 6/11/14.

QUINTO. Admitidas, pues, todas las pruebas solicitadas se señala para hoy, fecha en la que comparecen las partes, celebrándose el juicio con arreglo a las formalidades legales y con el resultado que consta en el acta levantada por la Sra. Secretaria Judicial, documentada en soporte videográfico, como disponen los artículos 147 y 187 de la LEC. Se practica el interrogatorio de partes, peritos y testigos y quedan los autos ya para sentencia.

SEXTO. En la tramitación del presente procedimiento se han observado las oportunas prescripciones legales con inclusión del plazo para dictar sentencia fijado en el artículo 434.1 de la ley de enjuiciamiento civil a pesar de la sobrecarga de trabajo que se padece en el Juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El presente procedimiento, registrado con el número 1156/2013, tiene como **antecedentes** los siguientes:

Dña. **demanda** a , Sucursal en España reclamando 14.232,88 €.

La demanda acciona con fundamento en la culpa extracontractual que sancionan los artículos 1.902 y



concordantes del Código Civil con la intención de indemnizarse por las lesiones y perjuicios derivados del accidente de circulación que describe interesando la condena de la demandada como entidad que ha de hacerse cargo del accidente al tener en cobertura la responsabilidad civil de quien estima que es su culpable.

En su versión el accidente acontece en Muriedas sobre las 20.00 horas del día 10/10/2011 cuando la actora se sube al autobús con matrícula 9415 BLR propiedad de ALSA y con seguro en vigor con (tanto el seguro obligatorio de viajeros o SOVI como el seguro obligatorio de automóvil o SOA) y tras reiniciar la marcha de forma brusca sufre una caída pues no le da tiempo a agarrarse.

La actora admite que la compañía demandada asumió el siniestro y pagó con base al SOVI la cantidad de 3.956,02 € pero entiende que tiene derecho a reclamar por el SOA tras calificar el accidente como hecho de la circulación.

Por lo demás, según la demanda, fruto del impacto que se produjo sufrió lesiones que tardan en curar 120 días con efecto impeditivo, que deben indemnizarse con 6.792 € a razón de 56.60 €/día, y 80 días sin efecto impeditivo, que deben indemnizarse con 2.436,80 € a razón de 30.46 €/día, restándole secuelas fisiológicas que valora con 8 puntos de Baremo, a indemnizar con 5.004,08 € alcanzando con ello la cantidad total antes reseñada de 14.232,88 €.

Frente a ello la compañía se opone en **contestación** en la que cuestiona tanto el accidente como la indemnización.

En cuanto al accidente sostiene que la caída de la actora no fue consecuencia de ninguna maniobra brusca por parte del conductor del autobús sino que es la víctima la que, al tratar de acceder al asiento, pierde el equilibrio.

Por ello admite que debía la indemnización conforme el SOVI pero no conforme el SOE pues no hay responsabilidad.

En cuanto a sus consecuencias discute el alcance de los daños que estima que se sobrevaloran por la reclamante.

En particular sostiene que como período de curación podrían aceptarse 108 días impeditivos y se opone a la secuela de algias postraumáticas que supondría valorar dos veces la misma secuela pues el dolor es un síntoma propio de la secuela de fractura de acúñamiento anterior.

SEGUNDO. Sentados los términos del debate, según lo precedentemente expresado, antes que nada procede abordar



la **dinámica del accidente**, objeto de polémica porque las partes propugnan versiones opuestas sobre algunos hechos.

Pues bien, rectamente entendidas las pruebas del caso, entiendo que no logran esclarecer los hechos de forma plena. La certidumbre es difícil y quedan puntos oscuros.

De las pruebas con que se cuenta hay tres que se practican en la vista, siendo la última el interrogatorio de la actora (DVD, 27.12 - 33.24) que naturalmente se mantiene, como no podría ser de otro modo, en el relato de la demanda (dice que claro que sintió un movimiento brusco del autobús) que no es sino fruto de la noticia que ella mismo da a su letrado, sin añadir ningún dato de significación en su perjuicio y sin que aporte mucho más.

Es significativo que no entre en contradicción con lo que afirmaba la demanda y que no incurra en incongruencias cuando explica cada uno de los detalles de lo ocurrido.

En sentido opuesto está el conductor Sr. (DVD, 16.37 - 26.35) que no extraña que defienda la versión de la compañía, que es también la de su empresa.

Es testimonio que hay que valorar con reservas, pues es de presumir que está influido por el deseo de exculparse.

En realidad son versiones opuestas que se equiparan en su mínimo valor probatorio debido a su implicación personal.

Hay un tercer elemento probatorio, que es el testimonio de Dña. (DVD, 10.43 - 16.07) que sitúa el escenario de los hechos pero no aporta nada en concreto sobre cómo sucedió la caída ya que no la pudo ver aunque sí es de reseñar que rechaza todas las características del lugar sobre las que pregunta la letrada de y que en su tesis explican la caída como la estrechez de la vía allí o la calzada empedrada.

Queda muy claro que la demandante se cayó en el autobús pero sobre las demás circunstancias que influyeron en los hechos en rigor hay que afirmar una prudente no certeza.

TERCERO. Así las cosas en principio desde la ignorancia de varios hechos (sobre todo del decisivo factor que explique el cómo y porqué de la caída de la parte demandante) se habría de llegar al fracaso de la demanda.

Esta idea no hallaría duda si se accionara con base en daños materiales pero hay una sólida base que permite otra conclusión porque como se reclama por daños



personales opera un título de imputación objetivo (en realidad un título cuasiobjetivo) que permite que la demanda prospere, sea parcialmente o de forma íntegra.

No se trata de una idea extravagante sino que, muy al contrario, cuenta con un terminante sostén legal en el artículo 1.2 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a motor, que para los daños de carácter personal precisa un sistema de responsabilidad distinto al establecido para los de orden material en la que sólo cabe exoneración cuando se pruebe que fueron debidos únicamente a negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo, sin que opere la remisión al artículo 1.902 del Código Civil (con su exigencia de culpa como corolario) que realiza el siguiente párrafo, circunscrita de manera exclusiva a los daños materiales.

Esta diferencia de tratamiento jurídico se pone de relieve en muchas resoluciones, como, por ejemplo, en las SSAP de Asturias de 31/5/1995, Sección 5ª, ponente: Domínguez Aguado, de 11/9/1997, Sección 1ª, ponente: Jose-Antonio Seijas Quintana, o la núm. 566/2005, de 12-diciembre, Sección 7ª, Jaén de 2/10/1997, AC 1997\663, 29/6/1999, AC 1999\1529, o núm. 241/2000, de 15/5, Sección 1ª, JUR 2000\196895, Barcelona de 19/6/2002, Sección 4ª, AC 2002\2079, Las Palmas núm. 500/2002, de 24/9, Sección 4ª, LA LEY JURIS 1300885/2002, o Madrid núm. 728/2005, de 13/10, Sección 14ª, AC 2005\1891, y se deduce meridianamente de las extensas consideraciones de la STC 181/2000, de 29/6, del Pleno, RTC 2000\181, EDJ 2000/13213, LA LEY 2000,7709, LA LEY JURIS 131725/2000, y está presente en la doctrina del Tribunal Supremo, pudiendo destacar la STS de la Sala 1ª núm. 767/1996, de 3/10, RJ 1996\7009, EDJ 1996/6797, A.C. 43/1997 y otras.

Es cierto que esta última resolución se refiere a un atropello y no a una colisión en marcha de dos vehículos, como es el caso que nos ocupa, más no considero que tal circunstancia, puramente circunstancial, cambie las cosas, debiendo recordar que la interpretación judicial es una actividad vinculada, informada, entre otras cosas, por el conocido principio general del derecho *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*, como dejaron sentado ya las SSTS de la Sala 1ª de 20-enero-1908 y 27-febrero-1909 y que nunca cabe una interpretación correctiva-restrictiva en perjuicio de la tutela judicial efectiva, en este caso de quien resulte lesionado en un accidente que, por razones connaturales que no le son imputables, no conceda aclarar sus circunstancias. A mi modo de ver pensar lo contrario es dejar en situación de



desprotección a quienes se vean implicados en colisiones en cadena u otras, donde, con la perspectiva del artículo 1.902 del Código Civil, es muy complejo, y en ocasiones prácticamente imposible, perfilar las responsabilidades.

No parece que esté de más subrayar que esta es la interpretación que postula la Sala 1ª de nuestro más Alto Tribunal en resoluciones recientes como las SSTS de la Sala 1ª núm. 1222/2008, de 16/12, ponente: Juan-Antonio Xiol Ríos, rec. 615/2002, ROJ STS 7514/2008, EDJ 2008/305128 y, con especial relevancia, la núm. 229/2010, de 25/3, rec. 1262/2004, ponente: Juan-Antonio Xiol Ríos, ROJ STS 2034/2010, RJ 2010\1987, EDJ 2010/52515, que, enjuiciando un accidente consistente en una colisión entre vehículos (un ciclomotor y un camión), que no un atropello, razona del siguiente modo: *"fundándose la responsabilidad del conductor por daños a las personas en el riesgo objetivo creado por la circulación (artículo 1.1 LRCVM) el legislador considera que la negligencia del perjudicado constituye una circunstancia susceptible de ser apreciada objetivamente, la cual, según su grado de relevancia, determina que no sea imputable al conductor en todo o en parte el resultado dañoso producido ..."*.

Es de resaltar que el caso enjuiciado no es un atropello.

Más recientemente ha recaído una sentencia que con más claridad, si cabe, coadyuga a este criterio. Se trata de la STS de la Sala 1ª de 6/2/2012, ponente el Ilmo. Juan-Antonio Xiol Ríos, recurso núm. 977/2008, EDJ 2012/37480.

La resolución es especialmente destacable porque el supuesto de hecho no sólo no es un atropello sino ni tan siquiera una colisión entre vehículos. Se trata del incendio de un remolque frigorífico mientras se encontraba realizando labores de carga en un establecimiento comercial, al sufrir un cortocircuito en el compresor frigorífico, que afecta tanto a la mercancía como al edificio e instalaciones del supermercado y que, no obstante, luego de calificarse por la Sala como hecho de la circulación, deriva en una responsabilidad civil que se conceptúa como objetiva conforme la inteligencia sobre el artículo 1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a motor antes expuesta que obtiene, de este modo, un intenso refuerzo.

Finalmente la polémica puede considerarse definitivamente zanjada con la STS núm. 536/2012, de 10/9, rec. 1740/2009, ponente: Juan A. Xiol Ríos, EDJ 2012/254449, donde el Pleno de la Sala 1ª ha querido fijar doctrina.



Por lo demás este entendimiento se repite en la más reciente STS de la Sala 1ª núm. 40/2013 de 4/2, rec. 588/2010, ponente: Ilmo. Seijas Quintana, EDJ 2013/4452.

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que conforme a la doctrina que propugna la Sala 1ª del Tribunal Supremo si los hechos no se han logrado esclarecer y se reclama por daños personales resulta obligado estimar la demanda.

Acudiendo a la STS núm. 536/2012 es de ver que se afirma:

"... un criterio de imputación de la responsabilidad derivada de daños a las personas causados con motivo de la circulación fundado en el principio objetivo de la creación de riesgo por la conducción. Este principio solamente excluye la imputación cuando se interfiere en la cadena causal la conducta o la negligencia del perjudicado (si los daños se deben únicamente a ella) o una fuerza mayor extraña a la conducción y al funcionamiento del vehículo, salvo, en el primer caso, que concurra también negligencia del conductor, pues entonces procede la equitativa moderación de la responsabilidad y el reparto de la cuantía de la indemnización. El riesgo específico de la circulación aparece así contemplado expresamente en la ley como título de atribución de la responsabilidad, frente a la tradicional responsabilidad por culpa o subjetiva en que el título de imputación es la negligencia del agente causante del resultado dañoso ...".

Para comprender mejor esta ciertamente abstracta consideración no está de más situarla en un contexto histórico. Es sabido que del Derecho Romano se heredó un criterio subjetivo que derivaba la responsabilidad civil de la culpa del autor del daño, un principio que inspira todos los Códigos europeos del siglo XIX directamente imbricado con dogmas liberales e individualistas de exaltación del principio de autonomía de la voluntad solo que en un momento dado, que suele situarse a finales del siglo XIX, se manifiestan limitaciones en este enfoque.

La primera razón fue la revolución industrial, que trae consigo un auge el maquinismo, fuente inagotable de riesgos y siniestros. Donde primer quiebra el principio de responsabilidad por culpa es en los accidentes de trabajo. La responsabilidad por culpa del patrono se sostenía bien en el contexto de una industrial artesanal, donde era sencillo apreciar las conductas pero se descubre inviable cuando se moderniza la industria al punto de generarse un problema social: hay un aumento exponencial de las posibilidades de accidentes al tiempo que disminuyen las posibilidades de probar la culpa del patrono, lo que, unido a la decadencia del individualismo y al auge de lo social y del socialismo y a la irrupción



de una mentalidad colectiva más identificada con el designio de indemnizar a las víctimas que con el de observar cuidadosamente la culpabilidad de los autores de los daños hace nacer una idea social dominante: hay que reparar todos a aquéllos perjuicios en los que no se vea una razón clara para que la víctima los soporte por sí.

Este es el contexto que explica una norma y una solución tan abstracta como la que inspira la decisión anunciada, una idea que además va de la mano de los seguros de responsabilidad civil, obligatorios en muchos casos, ante lo que ocurre que se termina diluyendo la figura del responsable. Lo que importa es la víctima, la reparación y no tanto depurar la responsabilidad del autor del daño.

Todo lo expuesto nos conduce a la siguiente composición de lugar: si no se llegan a esclarecer los hechos con aceptable certidumbre habrá que condenar a la demandada

Por lo demás conforme la doctrina de nuestra Audiencia, sobradamente repetida, un accidente ocurrido en un autobús en marcha (como fue el caso) es hecho de la circulación.

CUARTO. Sentado cuanto antecede procede, por último, abordar la controversia relativa al **alcance de los daños**.

Dados los términos de la discusión se trata de enjuiciar una de las dos secuelas (las algias postraumáticas que la compañía rechaza) y el tiempo de curación imputable al accidente, discutiendo si son 200 días o bien 108 días.

Aquí hay un referente al que obligadamente hay que atenerse cual es el dictamen del Instituto Médico Cantabria, del Dr. y la Dra..

Esta es la que finalmente comparece a la vista, a diferencia el perito de , que declara por exhorto, lo que inevitablemente le concede una ventaja a aquélla.

Se trata de un especialista en valoración del daño corporal que ha examinado de forma continuada a la lesionada y cuyas consideraciones se ajustan a la lógica.

A su criterio se le opone el opuesto de un médico que hizo seguimiento de la lesionada, aunque la vio dos veces frente a la Dra. que hizo seguimiento continuo.

Además el criterio de la Dra. resulta más lógico.

En cuanto al tiempo de curación de igual modo si hay que estar al momento en que se consolida la fractura es más



razonable lo que hace la Dra. teniendo en cuenta que hay un momento en que a la lesionada se le quita el corsé ortopédico y se le pone una faja ortopédica y aún se sigue un tratamiento rehabilitador. Hasta entonces no se estabiliza el cuadro clínico. Por tanto no pueden ser 108 días sino un período mayor hasta 120 días impositivos y otros 80 días más hasta que finaliza la rehabilitación.

Ocurre que a los 108 días hay una retirada paulatina del corsé. Desde entonces se quita a ratos hasta pasar a la faja y a los 120 días hay ya una retirada completa del corsé. El período de curación concluye con la rehabilitación, desde el 20 de marzo hasta 27 de abril.

En cuanto a la secuela discutida desde el momento en que las algias postraumáticas se recogen en el Baremo como una secuela específica, naturalmente distinta a la fractura aplastamiento, que es daño anatómico (aun sin dolor o incluyendo el dolor) mientras que aquél, las algias, es una secuela funcional no se comprende la opinión del perito de que considera, contra ley, que la secuela de agravación de artrosis o algia postraumática sólo se debe conceder si no hay fractura.

Finalmente es de aplicación la actualización del Baremo vigente al tiempo en que se puede situar el alta médica, la del 2011, conforme la consolidada jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que comienza con la STS núm. 429/2007, de 17-abril, ponente: Encarnación Roca Trías, id. Cendoj núm. 28079110012007100678 y está estabilizada.

En definitiva, la estimación de la demanda será íntegra.

QUINTO. Respecto a los **intereses** que debe abonar la entidad pública condenada habrán de ser los previstos en el artículo **20** de la vigente Ley de Contrato de Seguro.

SEXTO. En cuanto a las **costas** es de aplicación el artículo **394.1** de la LEC, que determina su imposición a la demandada conforme a la regla de vencimiento objetivo que no hay méritos para moderar dadas las circunstancias.



Vistos los preceptos legales citados en el texto de esta resolución y todos los demás de general y pertinente aplicación, por las facultades que me han sido conferidas por la Constitución y el resto del Ordenamiento jurídico

F A L L O

Que, con íntegra estimación de la demanda interpuesta por la procuradora Dña. Eva Plaza López, a instancia de **Dña.**, contra ; **Sucursal en España**, debo condenar y CONDENO a la demandada a pagar a Dña. la cantidad de 14.232,88 € con el interés del artículo 20 de la LCS y con imposición de costas a la parte demandada.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1-julio, del Poder Judicial y 208.4 de la LEC 1/2000, de 7-enero, notifíquese esta sentencia a las partes y hágaseles saber que la misma no es firme puesto que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN ante la Ilma. Audiencia Provincial de Santander que se habrá de interponer por escrito con firma de abogado y dentro del plazo de VEINTE DÍAS contados desde el día siguiente a su notificación, tramitándose el recurso de conformidad con los artículos 455 y concordantes de la vigente LEC, tras la modificación experimentada en virtud de la Ley 37/2011, de 10-octubre, de medidas de agilización procesal, que es aplicable en razón de su Disposición Transitoria Única.

Se debe tener presente la reforma que introduce la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 1/2009, de 3-noviembre, que obliga a hacer depósito de 50€ para poder recurrir, al hilo de lo cual se advierte que, de conformidad con la Instrucción 8/2009, de 4-noviembre, relativa al procedimiento a seguir en relación a la cuenta 9900 de depósitos de recursos desestimados, en caso de interponer recurso contra la resolución que se notifica habrá de constituirse depósito por importe de CINCUENTA EUROS en la cuenta del expediente e indicar en el campo concepto del documento resguardo de ingreso que se trata de un recurso, seguido del código y tipo concreto de recurso de que se trate, siguiendo la numeración y descripción contemplada en la relación que se adjunta y si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el Código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta de Expediente, separado por un espacio, teniendo presente que al momento de interponer el recurso el recurrente tiene que acreditar haber constituido el depósito para recurrir, mediante la presentación de copia del resguardo u orden de ingreso.



En caso de que se estime total o parcialmente el recurso, el importe constituido para recurrir será reintegrado al recurrente mediante la expedición de Mandamiento de Pago o transferencia a la cuenta no judicial correspondiente.

En el supuesto de que el recurso sea inadmitido o se confirme la resolución recurrida el recurrente perderá el depósito y su importe será transferido desde la cuenta de expediente judicial correspondiente hasta la cuenta 9900.

Líbrese testimonio de la presente resolución, que se unirá a los presentes autos, custodiándose el original en el libro de sentencias que se lleva en este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN. Dada, leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Sr. Magistrado que la dictó, hallándose celebrando audiencia pública en el día de su pronunciamiento, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.

